

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA FACULTAD

Fragmentos de artículo de Javier Muñoz Soro y Nicolás Sesma Landrin, “Redes de poder. La Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en la construcción del régimen franquista (1943-1956)”, *Historia Social*, ISSN 0214-2570, nº 79 (2014), págs. 107-128.

La Ley de Ordenación Universitaria (LOU), promulgada el 29 de julio de 1943, creó una única facultad de «Ciencias Políticas y Económicas» en la Universidad Central de Madrid. Con ello se rendía pleitesía al precepto fascista de primacía de la política, «en el sano sentido de la palabra», como aclaraba el ministro Ibáñez Martín, un elemento presente en un plan de estudios que afirmaba:

«Las preocupaciones pragmáticas e inmediatas, escrupulosamente tenidas en cuenta, deben ceder, sin embargo, el primer puesto a los principios esenciales».

El curso de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, dio al traste con las ambiciosas expectativas falangistas. La facultad hubo de modificar su discurso fundacional, las cátedras fueron dotándose a un ritmo mucho más lento de lo inicialmente dispuesto y con criterios que primaban la renovada imagen católica de la dictadura. La designación de Fernando María Castiella como decano –candidato de consenso entre falangistas y católicos en la terna propuesta por el rector de la Universidad Central, Pío Zabala– era la mejor muestra del importante ascendiente del Instituto de Estudios Políticos (IEP) en la nueva facultad. Los falangistas seguirían controlando la práctica totalidad del recorrido formativo de la juventud universitaria más inquieta políticamente, gracias a una densa red socializadora completada por el Sindicato Español Universitario (SEU) y varios Colegios Mayores.

El 15 de febrero de 1944 empezó el curso en la facultad con una «solemne inauguración» en la que, junto al rector y al decano, pronunciaron discursos el delegado nacional del SEU, Rodríguez de Valcárcel, y el decano de la facultad de Derecho, Eloy Montero. Las respectivas intervenciones mezclaron retórica falangista y devoción católica para subrayar la misión principal del centro como formador de élites. Valcárcel habló de «cómo el Estado falangista ha recogido las aspiraciones latentes, encaminadas a que ocupen los puestos principales de nuestra administración quienes tengan los debidos conocimientos económicos y políticos». Al día siguiente empezaron las clases con una misa de Espíritu Santo oficiada por Juan Zaragüeta, catedrático de Filosofía, pero no en los locales del pabellón Valdecilla de la Facultad de

Derecho, como estaba previsto, sino en el anexo salón del Paraninfo, con mayor capacidad para acoger el elevado número de alumnos matriculados.

A lo largo de los meses siguientes, Castiella intentó trasladar una imagen más acorde con las previsibles exigencias de las potencias aliadas occidentales. Dio así entrada tanto en la facultad como en el IEP a miembros destacados de la Acción Católica Española (ACE) y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP). Entre ellos Manuel Torres López, futuro decano de la Facultad de Derecho, José María García Escudero, redactor de la *Revista de Estudios Políticos* y catedrático de Política Exterior, Joaquín Ruiz Giménez, entonces presidente mundial de *Pax Romana* y experto en relaciones Iglesia-Estado, Fernando Martín-Sánchez Juliá, presidente de la ACNP y profesor de Política Social agraria e industrial, Alfredo Sánchez Bella, director del Instituto de Cultura Hispánica (ICH), encargado de explicar las instituciones americanas, Mariano Sebastián Herrador, catedrático de Hacienda Pública, y el propio Martín Artajo, presidente de ACE y ministro de Asuntos Exteriores.

La facultad cosechó inicialmente un éxito considerable, lo que llevó a Castiella a hablar de «plebiscito» a favor de su instauración. En el curso 1944 había 1222 alumnos, 1500 en 1945 y 1012 en 1946, de los cuales dos terceras partes pertenecían a Económicas, una tendencia que no dejaría de acentuarse en los años siguientes. Aquel primer alumnado se caracterizaba por una media de edad elevada, al tratarse en su mayor parte de funcionarios o profesionales liberales ya en ejercicio. En palabras de un periodista, en él se hallaba representada «la mocedad curtida, la madurez provectora e, inclusive, la ancianidad», pues «entre ellos hay un general y varios jefes y oficiales del Ejército y la Guardia Civil, médicos, abogados, ingenieros, un juez, industriales sin título universitario». Pronto los locales de Valdecilla quedaron pequeños, lo que llevó al decano a reclamar algunas dependencias anexas que se iban quedando vacías conforme se trasladaban a la ciudad universitaria otros estudios de Derecho y Ciencias.

El examen de ingreso consistía en varias pruebas: el resumen escrito de una lección impartida por un profesor de la facultad sobre un tema de carácter general; la lectura y traducción de un texto en uno de los idiomas modernos cursados en el bachillerato; la traducción de un texto latino clásico, y para los aspirantes al curso de Economía, un ejercicio práctico de matemáticas. Ese examen era válido para el ingreso en las facultades de Ciencias Políticas y Económicas, Derecho y Filosofía y Letras. Además de la licenciatura se ofrecían estudios de doctorado en las dos secciones de Políticas y Económicas, y desde 1948 hasta 1954 se presentaron un total de 61 tesis doctorales, lo que con el tiempo se convertiría en la principal vía de reproducción de

una plantilla que, en los primeros años, procedía de otras universidades y facultades, sobre todo Derecho y, en menor medida, Filosofía y Letras.

Entre aquellos profesores que confluyeron desde distintos centros académicos se encontraban personas estrechamente vinculadas al IEP como Javier Conde, su director entre 1948 y 1956, José María de Areilza, José Antonio Maravall, Luis Díez del Corral, José Larraz, Juan Beneyto, Alberto Martín Artajo o Joaquín Ruiz-Giménez. A los que se sumaron en los años cincuenta Rodrigo Uría, Salvador Lissarrague, Carlos Ollero, Luis García de Valdeavellano y Antonio Truyol Serra. Igualmente, entre las primeras promociones de licenciados estaban muchos de los futuros profesores de la facultad, como Manuel Fraga y Paulino Garagorri, así como la primera generación de economistas formados en la universidad: Manuel Melis Clavería, José Luis Sampedro, Leopoldo Zumalacárregui Calvo –hijo de José María Zumalacárregui– o el grupo de Juan Velarde Fuertes y Enrique Fuentes Quintana, que seguía el magisterio falangista-keynesiano de Manuel Torres Martínez. Algunos de ellos marcharon a otras universidades, caso de Juan José Linz, Rodrigo Fernández- Carvajal o Gonzalo Pérez de Armiñán, o bien a la administración del Estado, por ejemplo la Organización Sindical (OSE), como hicieron Higinio París Eguilaz, Antonio Chozas Bermúdez o Manuel Lizcano.

De la mano de esos profesores, el ministro Castiella convirtió a la facultad y al IEP en baluartes doctrinales del franquismo, así como en plataformas para la búsqueda de apoyos internacionales. La facultad colaboraba estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo en la organización de la Escuela Diplomática, y en el IEP los antiguos proyectos estrictamente nacionalsindicalistas dejaron paso a iniciativas dirigidas al conjunto del régimen, como la redacción del Fuero de los Españoles o la teorización del sistema político como una «democracia orgánica» de signo católico.

Además, gracias a la estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Previsión (INP) que dirigía el administrativista Luis Jordana de Pozas, en marzo de 1946 se creó una cátedra sobre Seguridad Social, que ocupó Pedro Cantero Cuadrado, capellán castrense y asesor nacional de Auxilio Social. Se escenificaba nuevamente la doble identidad católica y falangista que caracterizaba a la facultad. Para el acto de celebración de su puesta en marcha se consiguió un importante golpe de efecto internacional: nada menos que la presencia de sir William Beveridge en persona.

Con la dictadura sometida a una creciente presión diplomática, el hecho de que uno de los arquitectos de la reconstrucción europea de posguerra aceptara una invitación procedente de la España de Franco revestía una especial significación, por más que el protagonista quisiera

restarle trascendencia al remarcar que tenía un «carácter estrictamente particular». Como señalaba la propia *Revista de Estudios Políticos* en su triunfal relato de la visita, «el acontecimiento es de magnitud suficiente para que no pueda silenciarse el aplauso al joven decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas».

A pesar de estos éxitos aislados, habría que esperar a los años cincuenta, cuando España empezó a ser admitida en los organismos internacionales, para que la facultad avanzara más decididamente en su apertura hacia el exterior. La internacionalización era especialmente relevante para la sección de Económicas, sobre todo por la urgencia de los desafíos planteados ante el fracaso del modelo autárquico, la gravísima situación financiera y la necesaria apertura a los mercados exteriores. A este respecto, es reveladora una carta enviada por el decano de la facultad al rector en marzo de 1954 urgiéndole a impulsar los contactos con profesores de las principales universidades norteamericanas, «dada la importancia que pueden tener estas visitas para los intereses generales de la Nación».

Para dicha batalla, tanto la facultad como el IEP no dejaron de articular nuevos instrumentos de presencia internacional, como las asociaciones españolas de Ciencia Política y de Sociología, incorporadas formalmente a las estructuras de la UNESCO a mediados de los años cincuenta. En 1954 la primera cátedra de Sociología, ocupada por Enrique Gómez Arboleya, suponía la definitiva institucionalización académica de estos estudios tras la ruptura de la guerra y acabaría convirtiéndose en uno de los principales cauces de internacionalización de la facultad. Jóvenes profesores ayudantes, como Juan José Linz, Salustiano de Campo, José Castillo, José Jiménez Blanco, Salvador Giner, Carlos Moya, Luis González Seara o, procedentes de varias cátedras de Económicas, Ramón Tamames, Luis Ángel Rojo o Gonzalo Anes, empezarían en esos años a salir al extranjero para completar sus estudios, beneficiándose de los nuevos programas de intercambios como las becas Fulbright.

Sin embargo, los primeros años cincuenta fueron de estancamiento, en paralelo a la relativa pérdida de peso político de Falange. Si en 1950 se alcanzó el máximo de estudiantes matriculados, 2.140 entre las dos secciones de Políticas y Económicas, en 1954 había descendido hasta los 1500. A esa caída contribuyó la indefinición de las salidas profesionales, no obstante abriera en teoría un amplio abanico de oposiciones a las distintas escalas de funcionarios de Hacienda, Gobernación, Trabajo, Industria y Comercio y del Consejo de Estado. En 1945 un periodista escribía que la licenciatura de Ciencias Económicas suponía «un ciclo de estudios que, prosaicamente hablando, no renta, no produce», incluso que era «la reválida más antieconómica de España».

Para resolver en lo posible esa indefinición se promulgaron sucesivos decretos, empezando por el del 11 de noviembre de 1944 que equiparaba la licenciatura en Ciencias Políticas y Económicas a la de Derecho a efectos de participación en las oposiciones a los cuerpos que integraban el Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Previsión, Instituto Social de la Marina o el Servicio de Reaseguros de Accidentes de Trabajo. Pero el principal paso en la reforma se dio con la ley de 17 de julio de 1953 sobre «Ordenación de las Enseñanzas Económicas y Comerciales», en virtud de la cual la carrera mercantil quedó incorporada a la universidad, manteniéndose las Escuelas de Comercio solo para la preparación del grado de técnico mercantil. La ley, basándose en «la evolución de la economía y la industria en los últimos tiempos», integraba los estudios superiores de Comercio (Intendencia Mercantil y Actuariado de Seguros) en la que, desde ese momento, pasaría a llamarse Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales.

Al mismo tiempo se aprobó la creación de nuevas facultades en los distritos universitarios de Barcelona y Valladolid. La facultad de Barcelona iniciaría las clases en 1954 con 260 alumnos, y no alcanzaría el millar hasta 1960, mientras que el distrito de Valladolid abriría su facultad en Bilbao en el curso 1956-1957, con una matrícula inicial de 440 estudiantes. Serían las únicas hasta la creación en 1964 de otra facultad en Málaga, dependiente de la universidad de Granada, con unos 500 alumnos. Estos pasos hacia la modernización se dieron desde 1951 con Joaquín Ruiz-Giménez en el Ministerio de Educación Nacional, junto a un equipo de intelectuales falangistas y católicos acenepistas, con Pedro Laín Entralgo como rector de la Universidad de Madrid y Manuel Torres Martínez como decano de la facultad.

Muy ligado a la facultad desde sus orígenes, como hemos visto, Ruiz-Giménez trató de darle nuevo impulso, pues constituía uno de los trampolines de su proyecto político-cultural a través de la relegitimación del régimen y la unidad de todas las fuerzas en él representadas. Un proyecto que le enfrentó al sector monárquico y nacionalcatólico, en particular a sus intelectuales y profesores vinculados al Opus Dei, a quienes acusaba de subvertir la primacía de la política para dársela a la técnica y la economía.

Pese al empeño del ministro, en los años siguientes no dejó de aumentar la tensión entre las asignaturas de formación ideológica y las dirigidas a la especialización profesional, en particular las económicas y las orientadas a nuevas áreas de conocimiento, como la estadística o la sociología. De hecho, las primeras fueron perdiendo importancia a favor de las segundas, que desde finales de los años cincuenta vieron aumentar su número de

alumnos, beneficiadas por la creciente demanda de economistas por parte del Estado como consecuencia de la apertura a los mercados exteriores, la intervención en las organizaciones económicas internacionales y la aplicación del Plan de Estabilización y los sucesivos planes de Desarrollo. Era el triunfo de los llamados «tecnócratas» del Opus Dei aupados al poder por Carrero Blanco en el cambio de gobierno de 1957, entre ellos el profesor de la facultad Alberto Ullastres, en detrimento precisamente del grupo de intelectuales falangistas y acenepistas que había configurado la personalidad de la facultad durante su primera década de existencia.

Al final fueron muy pocos los dirigentes del régimen de primer y segundo nivel licenciados en Ciencias Políticas, según los estudios de Miguel Jerez Mir (*Elites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957*, Madrid, CIS, 1982), pese a que la gran mayoría tenía estudios universitarios. Incluso entre los altos cuadros de extracción falangista, que precisamente habían impulsado la creación de la facultad, de un total de 166 tan solo había seis surgidos de la titulación, frente a los 85 licenciados en Derecho. La proporción solo mejoraba ligeramente entre las élites de extracción católica, con cinco dirigentes procedentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de un total de 96, de ellos 42 licenciados en Derecho. Como puede verse, el franquismo continuaba una antigua tradición letrada de las élites políticas españolas desmintiendo su propia voluntad de ruptura, representada por una facultad que ponía en primer lugar la formación política de acuerdo con los principios inspiradores del Movimiento.

De hecho, más allá de las proclamas oficiales, aquella dicotomía ideal entre un polo político y otro técnico se resolvió claramente a favor del segundo, lo que se tradujo en un distanciamiento tanto en términos de matrícula como de peso universitario de la sección de Económicas. El significativo aumento del número de estudiantes de la facultad durante los años sesenta, en un ambiente de progresiva «repolitización» de la sociedad española, obligó a abandonar en 1965 el viejo caserón de San Bernardo para ir a un nuevo edificio en la Ciudad Universitaria de Madrid. De los 12.121 alumnos matriculados en 1967, sin embargo, solo 1.280 escogieron la sección de Políticas y la proporción era semejante, si bien no tan acusada, entre los 238 profesores y 52 catedráticos en los cuatro distritos universitarios. Un proceso que culminó en 1969 con la creación de la Facultad de Económicas y Empresariales, a su vez dividida entre los estudios de economía general y los estudios de empresa, que finalmente adquirirían rango de licenciatura.

No puede decirse, con todo, que la facultad quedara en una posición marginal dentro del entramado institucional e ideológico del franquismo. Su papel en la defensa de la dictadura durante los años del aislamiento fue relevante, así como en su ulterior proceso de internacionalización, sobre todo relacionado con las áreas de conocimiento más útiles para la moderna administración del Estado, en particular la economía y la sociología.

Entre sus profesores y primeras generaciones de alumnos se encontraban algunas personalidades destacadas de la administración y de los sucesivos gobiernos de la dictadura: los ministros Fernando María Castiella, Alberto Martín Artajo, Joaquín Ruiz-Giménez y Alberto Ullastres durante los años cuarenta y cincuenta, así como Manuel Fraga Iribarne, José Luis Villar Palasí, Alberto Monreal Luque, Antonio Carro Martínez, Nemesio Fernández-Cuesta Illana y José Luis Cerón Ayuso en los sesenta y setenta. Junto a ellos diplomáticos como José María de Areilza, Enrique Tomás de Carranza y José Miguel Ruiz Morales; periodistas y especialistas en comunicación, como Juan Beneyto, o el propio rector de la Universidad Central entre 1956 y 1964, Segismundo Royo Villanova. En los años sesenta la facultad incluso ocuparía en gran medida el espacio dejado como centro de producción ideológica por un IEP en decadencia debido a su enquistamiento en posiciones ideológicas obsoletas bajo la presidencia de Jesús Fueyo, también profesor de la facultad.

Paradójicamente la facultad se acabaría convirtiendo en un «vivero de cuadros», pero no del régimen, sino de las organizaciones clandestinas que luchaban contra él. El 8 de febrero de 1956 ya había sido escenario, junto a la Facultad de Derecho que compartía el caserón de San Bernardo, de los sucesos que llevaron al cese de los ministros de Educación Nacional y del Movimiento, punto de arranque para la organización de una oposición antifranquista en el interior con especial protagonismo del mundo universitario.

En el seno de una universidad con un peso social cada vez mayor y sometida a las fuertes tensiones derivadas del aumento exponencial del alumnado, en 1962 y en 1964 volverían a producirse protestas en una movilización cada vez más extensa e intensa que culminaría, el 18 de mayo de 1968, con el famoso concierto de Raimon en el vestíbulo central de la facultad, organizado por el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios (SDEU) y presentado por Jaime Pastor, delegado estudiantil y miembro por entonces del Frente de Liberación Popular (FLP). Varios miles de asistentes allí concentrados corearon las canciones en catalán del cantautor valenciano –«*non creiem en les pistoles...*»– ajenos al destino que los fundadores de la facultad habían previsto para ellos.



Concierto de Raimon en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en mayo de 1968